

C.A. de Santiago

Santiago, veintidós de febrero de dos mil veintidós.

Al folio 6: téngase presente.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Comparece Estrella San Martín Toloza, abogado, defensora penal pública penitenciaria, quien interponen recurso de amparo en favor de Miguel Ángel Reyes Pérez, en contra de la resolución de fecha 31 enero de 2022, pronunciada por el 5° Juzgado de Garantía de Santiago, en los autos RIT 811-2016, por la que se rechazó la solicitud de la Defensa del amparado de abonar, a la condena que actualmente cumple el tiempo que estuvo sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total, desde el día 28 de diciembre de 2014 al 04 de junio de 2015, en causa diversa.

Pide que, acogida que sea la presente acción, se deje sin efecto la resolución dictada por el Tribunal recurrido, y se ordene disponer se abonen a la condena que el amparado actualmente cumple, los 159 días ya referidos.

Funda el recurso expresando que el amparado fue condenado en la referida causa a sufrir la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como autor del delito de robo en lugar habitado.

Señala que con fecha 31.01.2022, tuvo lugar audiencia de revisión de la sentencia y penas, en la causa referida, oportunidad en la que la Defensa del amparado, solicitó se abonare a la condena que actualmente cumple, el tiempo que estuvo sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total del artículo 155 letra a) del Código Procesal penal en causa diversa, causa RIT 5468-2014 del 5° Juzgado de Garantía de Santiago, desde el día 28 de diciembre de 2014 al 04 de junio de 2015, esto es 159 días, causa en la que finalmente con fecha 24 de agosto de 2015 se decretó el sobreseimiento definitivo.

Expone que el tribunal rechazó la petición planteada, argumentando que, en la especie, no se daban los requisitos del art. 164 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, que no existió una posibilidad de juzgamiento conjunto entre ambas causas.

Alega que la resolución impugnada es evidentemente ilegal, en cuanto agrega un extremo no previsto en nuestro ordenamiento jurídico, para la



concesión de los abonos solicitados, toda vez que, en la especie, no se daban los requisitos del art. 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Expone que al rechazar la solicitud de abono, en base a no darse la posibilidad de juzgamiento conjunto del art. 164 COT, no existiendo norma jurídica expresa que establezca dicho requisito, se está privando de la libertad personal al amparado por un mayor tiempo al que corresponde según lo prescrito en nuestra Carta Fundamental y las leyes.

Afirma que la petición se enmarca como un mecanismo de reparación por parte del Estado en favor del amparado, debido a que fue privado de su libertad personal estando sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total por un período de 159 días, causa que finalmente fue sobreseída de manera definitiva y que existiendo un mecanismo denominado indemnización por error judicial, los criterios jurisprudenciales han restringido excesivamente el empleo de esta herramienta en perjuicio de las personas que se han visto privadas de libertad y luego fueron declaradas absueltas.

Alega que si bien, no existe norma expresa que habilite la petición de abono en causa diversa, existen una serie de normas legales y constitucionales, que permiten dar sustento a la petición del amparado, citando al efecto los artículos 24 y 26 del Código Civil, 26 del Código Penal y 348 del Código Procesal Penal.

En cuanto a conceder las peticiones de abono sólo en el evento de factibilidad de juzgamiento conjunto conforme el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, señala que no es posible exigir este factor temporal para proceder al abono en causa diversa, ya que regula una institución absolutamente distinta: esto es, la unificación de penas, razón por la cual que no puede exigirse en caso de abonos.

**Segundo:** Que, evacuando el informe solicitado doña Olaya Gahona Flores, juez titular del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, señalando que el amparado tiene la calidad de condenado en virtud de sentencia definitiva condenatoria dictada por ese Tribunal de Garantía en virtud de una acusación del Ministerio Público, y en audiencia de procedimiento Abreviado en el cual el amparado aceptó expresamente los hechos contenidos en la acusación y los antecedentes de la investigación que la fundan. Así, por la comisión del delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación, fue condenado a tres años de presidio menor en su grado medio, en calidad de



autor de dicho delito y en grado de consumado, pena corporal que cumplió mediante la pena sustitutiva de Reclusión Nocturna por igual período.

Agrega que con fecha 31 de enero de 2022 se llevó a cabo audiencia de Revisión de la sentencia y pena, oportunidad en la que el Sr. Defensor Penal solicitó al tribunal que se le abonen a la presente causa 159 días que el condenado estuvo con arresto domiciliario en causa diversa, RIT 5468-2014 de este mismo tribunal, la cual fue sobreseída, y que en la referida audiencia, el Magistrado don Carlos Gutierrez Moya rechazó la solicitud de la defensa penitenciaria en virtud de los siguientes argumentos: *“considerando el artículo 164 Código orgánico de tribunales, permite establecer beneficio a favor de los condenados cuando se pudieron haber tramitado de manera conjunta la causa primera y la causa segunda, al menos de manera hipotética o teórica por un mismo juzgado o tribunal, y en este caso, la causa por la cual fue condenado Miguel Reyes Pérez fue anterior a la causa originaria, donde fue beneficiada con un sobreseimiento definitivo, y en la actual causa fue condenado. Por lo tanto el tribunal considera que no es aplicable en este caso concreto, el artículo 164 del Código orgánico de tribunales y no habiendo un precepto legal que autorice al juez de garantía a reconocer estos abonos en sede de juzgado de garantía. El tribunal considera que no es posible que una persona imputada que luego fue absuelta, tenga una cuenta de ahorra de privación de libertad por muy injusta que haya sido y después tenga licencia para cometer delitos a posteriori con la confianza que el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal según sea el caso, va a descontar ese período.”*

Explica que, en primer lugar, el tribunal debe regir sus actos en conformidad con el principio de legalidad establecido en el artículo 7º inciso primero de nuestra Constitución Política de la República, y en materia procesal penal ocurre lo mismo, es decir, en el silencio de la ley, en ausencia de autorización que habilite de manera previa y expresa a un juez para imponer alguna sanción o para otorgar algún beneficio, hay prohibición. En segundo lugar, expone que no existe la laguna legal que afirma la amparada, por cuanto la propia Constitución Política de la República ha previsto la solución del problema planteado otorgando a quien ha sido sobreseído definitivamente o absuelto luego de haber sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Excelentísima Corte



Suprema haya declarado injustificadamente errónea o arbitraria, en su artículo 19 N° 7 letra i), tiene acción procesal de rango constitucional para solicitar la declaración previa al ejercicio de la acción de indemnización de perjuicios por error judicial.

Por lo anterior, estima que no existe entonces ningún precepto legal que autorice al juez de garantía a descontar la pena en caso que haya sido “injustamente” sometido a una cautelar de privación de libertad como la de arresto domiciliario total en un proceso penal distinto, y la jurisprudencia invocada por el amparado se refiere exclusivamente a Tribunales Superiores de Justicia, pero no a jueces de garantía que ni siquiera dictaron la sentencia definitiva que impuso la pena privativa de libertad en el proceso penal en que se ha solicitado el “descuento” de los días de duración de ésta.

Afirma que no existe perturbación o amenaza ilegal, en el derecho a la libertad personal y seguridad individual del imputado, ya que la solicitud de la defensa en cuanto al abono fue resuelta previo debate entre la fiscal y el abogado penitenciario en una audiencia especialmente fijada al efecto.

Concluye señalando que la resolución que por este recurso de amparo se pretende impugnar fue dictada con fecha 31 de enero de 2022, no habiéndose interpuesto por la defensa recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes a la misma en conformidad a la Ley.

**Tercero:** Que, el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: *“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”*. De igual forma el inciso tercero de dicho precepto señala que *“El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”*.



**Cuarto:** Que, lo discutido en el presente asunto es la negativa del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago respecto de no considerar al imputado Miguel Reyes Pérez en relación a la pena que debe cumplir de tres años de presidio menor en su grado medio en la causa RIT 811-2016 del 5° Juzgado de Garantía de Santiago el tiempo de 159 días que estuvo privado de libertad en la causa RIT 5468-2014 del mismo tribunal.

**Quinto:** Que, el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales dispone que: "Cuando se dictaren distintas sentencias condenatorias en contra de un mismo imputado, los tribunales que dictaren los fallos posteriores al primero no podrán considerar circunstancias que de haberse acumulado los procesos no se hubieren podido tomar en cuenta. Deberán, asimismo, regular la pena de modo tal que el conjunto de penas no pueda exceder de aquella que hubiere correspondido de haberse juzgado conjuntamente los delitos. En los casos del inciso anterior, el tribunal que dictare el fallo posterior deberá modificarlo, de oficio o a petición del afectado, a objeto de adecuarlo a lo allí dispuesto".

Resulta que en el presente caso, la causa por la que estuvo privado de libertad el recurrente, nunca estuvo en condiciones de tramitarse conjuntamente con aquella por la que actualmente cumple condena, puesto que en ella se dictó sobreseimiento definitivo el que se encontraba firme a la fecha de inicio de la actual.

**Sexto:** Que, en efecto, en relación a lo anterior, revisadas las fechas relevantes, según información que aparece en el Sistema Informático del Poder Judicial, aparece con claridad que los hechos de la causa anterior (2014) del 5° Juzgado de Garantía de Santiago, correspondieron al 28 de diciembre de 2014, dictándose sobreseimiento definitivo el día 24 de agosto de 2015; en tanto que, los de la causa vigente también del 5° Juzgado de Garantía de Santiago (2022) se cometieron recién 24 de febrero de 2016, lo que demuestra que estos procesos nunca estuvieron en condiciones procedimentales de tramitarse conjuntamente, lo que determina el rechazo de la presente acción cautelar.

**Séptimo:** Que, solo a mayor abundamiento, el artículo 348 del Código Procesal Penal establece que "La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley. La



sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención, prisión preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del artículo 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento. Para estos efectos, se abonará a la pena impuesta un día por cada día completo, o fracción igual o superior a doce horas, de dichas medidas cautelares que hubiere cumplido el condenado". En virtud de este precepto tampoco resultaba factible una interpretación que permitiera considerar abonos de días de privación de libertad, ya sea por medidas de detención, prisión preventiva o reclusión nocturna que no correspondan a los hechos que motivaron el juicio, ya que dicha norma se refiere a la sentencia condenatoria vinculada con el juicio que le corresponda inequívocamente, a la pena temporal, considerando abonos referidos a esa única causa, sin aludir a otros tiempos provenientes de procesos distintos.

**Octavo:** Que, en consecuencia, la decisión del tribunal de Garantía recurrido de no considerar como abono al cumplimiento de la condena el tiempo que el amparado permaneció privado de libertad en otra causa, no puede calificarse de ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y teniendo presente, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se decide que:

Se **RECHAZA** el recurso de amparo deducido en favor de Miguel Angel Reyes Pérez dirigido en contra del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago.

Acordada con el **voto** en contra del Abogado Integrante **Sr. Lepin** quien fue del parecer de acoger la presente acción cautelar por las razones que se indicarán:

**1º** Que, en definitiva, conforme a lo expresado en lo expositivo de este fallo, la cuestión a resolver radica en determinar si la resolución que lo motiva, a saber, la que le niega el abono solicitado por el amparado, puede devenir en ilegal, perturbando su derecho a la libertad personal y en segundo término determinar los alcances de lo preceptuado en el artículo 348 inciso segundo del Código Procesal Penal.

**2º** Que, para tales efectos ha de tenerse presente el carácter de derecho fundamental que reviste la libertad personal y seguridad individual, consagrada tanto en nuestra Carta Fundamental, en Convenciones



Internacionales sobre Derechos Humanos, así como la normativa que a nivel legal está llamada a regir la situación que se plantea.

3º Que, en ese contexto conviene tener presente que conforme al artículo 20 del Código Penal la privación de libertad de los sometidos a prisión preventiva no se reputa pena, lo que ha de relacionarse con lo dispuesto por el artículo 26 del mismo texto legal, que establece que la duración de las sanciones temporales empezará a contarse desde el día de la aprehensión del imputado, lo que lleva a concluir a esta Corte, que el tiempo de privación de libertad derivado de la ejecución de una medida cautelar debe imputarse a la pena que en definitiva se imponga al sentenciado, sin vinculación a proceso determinado, tanto porque el legislador no ha hecho distinción al respecto, cuanto por tratarse de un derecho fundamental el involucrado.

4º Que el ordenamiento procesal penal, no hace, sino que corroborar lo anterior, en tanto tampoco contempla alguna distinción, cuando al abono se refiere en el artículo 348 inciso segundo del Código Procesal Penal.

5º Que, además de lo dicho, debe destacarse en primer término que, no existe norma o mandato legal que prohíba abonar al cumplimiento de una condena el tiempo de prisión preventiva registrado en un proceso diverso, donde el imputado resultó sobreseído definitivamente.

6º Que de esta forma, las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar derechos fundamentales de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio o restricción a su libertad, como ocurre con el abono pedido por el amparado, lo que se encuentra además en concordancia con la garantía que reconoce el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República y la norma del artículo 5º del Código Procesal Penal que dispone: *“Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes.*

*Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía”.*



7° Que, en consecuencia, al decidirse por el juez recurrido que en la especie no procede la imputación de abonos en causa diversa, ha incurrido en una ilegalidad, puesto que incorporó requisitos que no se contemplan por el legislador, vulnerándose además el principio rector de interpretación restrictiva de la ley procesal penal, en cuanto afecta derechos fundamentales del imputado.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

**Ingreso N° Amparo 461-2021.**





Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, veintidós de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintidós de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

